

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1486

24 de septiembre de 2026

Presentado por la señora *Soto Tolentino*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar los Artículos 321 y 330 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”; enmendar el inciso (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 5 de la Ley 76-2020, según enmendada, conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, a los fines de fortalecer las salvaguardas aplicables al otorgamiento, utilización y aceptación de poderes, mandatos y autorizaciones que comprendan facultades sobre cuentas, fondos, productos financieros u otros activos; requerir autorización expresa y específica para determinados actos de especial trascendencia patrimonial; fortalecer los deberes de documentación y separación de bienes del representante; establecer advertencias notariales específicas; incorporar a los protocolos de prevención y detección de explotación financiera procedimientos para la evaluación de estos instrumentos cuando sean utilizados por cuenta de adultos mayores o adultos con impedimentos; proteger la autonomía del poderdante; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los poderes y demás instrumentos de representación cumplen una función esencial en la vida jurídica y financiera. Permiten que una persona designe a otra de su confianza para realizar determinadas gestiones, administrar bienes o actuar en su nombre cuando así lo estime conveniente. Bien utilizados, estos instrumentos constituyen una

manifestación de autonomía y planificación personal que debe ser respetada y preservada.

Precisamente por la amplitud de las facultades que pueden conferir, también pueden convertirse en instrumentos de explotación financiera cuando son utilizados fuera de sus límites, en beneficio del representante o de terceros, o en contravención de la voluntad de quien otorgó la autoridad. Este riesgo adquiere particular importancia cuando el poderdante es un adulto mayor o un adulto con impedimentos y ha delegado a otra persona facultades sobre cuentas, ingresos, ahorros, inversiones, seguros u otros recursos necesarios para su seguridad económica.

Como parte de los trabajos realizados por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico sobre la explotación financiera, se examinaron preocupaciones relacionadas con poderes otorgados a familiares y con movimientos de cuentas efectuados al amparo de esos instrumentos. La discusión reflejó diferencias de criterio respecto a la imposición de topes generales a transacciones, pero coincidió en la necesidad de fortalecer las salvaguardas relacionadas con el alcance, las advertencias, la validación y la utilización de los poderes.

El Código Civil de Puerto Rico de 2020 ya contiene protecciones importantes. Su Artículo 320 dispone que la representación comprende las facultades conferidas por ley o por el acto de apoderamiento; el Artículo 321 exige al representante rendir cuentas de los bienes recibidos; el Artículo 322 prohíbe, sin conformidad expresa del representado, el autocontrato y la aplicación de bienes obtenidos mediante la representación a negocios propios; y el Artículo 330 establece que los poderes redactados en términos generales solamente comprenden actos de administración y que las facultades conferidas se interpretan restrictivamente.

No obstante, el ordenamiento puede fortalecerse identificando expresamente determinadas actuaciones de especial trascendencia patrimonial que no deben inferirse

de cláusulas generales. La autoridad para administrar una cuenta no debe entenderse automáticamente como facultad para donar sus fondos, convertir al representante en cotitular, alterar beneficiarios, crear derechos de supervivencia o utilizar los bienes del poderdante para garantizar obligaciones personales del representante o de terceros.

La presente Ley no pretende presumir incapacidad por razón de edad o impedimento, ni imponer restricciones generales a la libre disposición de los bienes. Su objetivo es precisamente el contrario: proteger la voluntad del poderdante mediante una regla de claridad. Cuando una persona desea conferir facultades que pueden alterar de forma significativa la titularidad o destino final de su patrimonio, esa decisión debe surgir expresamente del instrumento y no de una interpretación extensiva posterior.

La Ley Notarial de Puerto Rico ya requiere que el notario juzgue la capacidad legal de los otorgantes y les formule las reservas y advertencias legales pertinentes. Esta Ley incorpora advertencias específicas para aquellos instrumentos públicos que concedan facultades sobre activos financieros, sin crear una certificación médica automática ni formalidades basadas exclusivamente en la edad del otorgante.

De igual forma, la Ley 76-2020, según enmendada, exige a las instituciones cubiertas adoptar protocolos de prevención y detección de explotación financiera. Resulta razonable que dichos protocolos contemplen cómo se recibe y evalúa un poder, mandato o autorización presentado para realizar una transacción por cuenta de un adulto mayor o adulto con impedimentos, particularmente cuando la transacción solicitada puede exceder las facultades expresamente concedidas o presenta otros indicadores de posible explotación financiera.

Esta medida procura, por tanto, una respuesta coordinada: mayor precisión en el contenido de los poderes, deberes razonables de documentación por parte del representante, advertencias notariales dirigidas a proteger la voluntad del otorgante y protocolos institucionales que permitan identificar el alcance del instrumento sin convertir la edad, el impedimento o la relación familiar en una presunción de explotación.

Con estas salvaguardas, la Asamblea Legislativa fortalece la prevención de la explotación financiera sin menoscabar la autonomía personal, la validez de los poderes legítimamente otorgados ni la capacidad de los adultos mayores y adultos con impedimentos para decidir libremente quién puede asistirles en el manejo de sus asuntos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 321 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue:

“Artículo 321. — Rendición de cuentas.

Al concluir la representación, el representante debe rendir cuentas a la persona representada de los bienes recibidos.

Cuando la representación comprenda la administración, manejo o disposición de dinero, cuentas de depósito, valores, inversiones, seguros, anualidades, fondos de retiro u otros activos financieros pertenecientes a una persona natural, el representante deberá, además:

(a) conservar récords razonablemente completos de las transacciones realizadas al amparo de la representación y de la documentación que evidencie, cuando corresponda, su propósito, cuantía y destinatario;

(b) mantener separados los fondos y bienes de la persona representada de los propios del representante, excepto cuando exista una cotitularidad válida independiente de la representación o el instrumento disponga expresamente otra cosa conforme a derecho;

(c) abstenerse de utilizar los fondos o bienes de la persona representada para beneficio personal del representante, salvo en aquellas circunstancias expresamente autorizadas por la persona representada, por el instrumento o por ley; y

(d) poner a disposición de la persona representada, a requerimiento de esta y en la medida razonablemente posible, la información necesaria para conocer las transacciones efectuadas al amparo de la representación.

Lo dispuesto en este Artículo se entenderá sin menoscabo de las demás obligaciones, prohibiciones y remedios establecidos en este Código.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 330 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como el “Código Civil de Puerto Rico de 2020”, para que lea como sigue:

“Artículo 330. — Poder redactado en términos expresos o generales.

El poder redactado en términos generales solo comprende los actos de administración.

Para poder transigir, enajenar, hipotecar o gravar bienes se requiere un poder que así lo autorice expresamente.

Las cláusulas del poder que confieren facultades son interpretadas restrictivamente.

Cuando el poder comprenda facultades de administración o disposición sobre dinero, cuentas de depósito, valores, inversiones, seguros, anualidades, fondos de retiro u otros activos financieros pertenecientes a una persona natural, deberán constar de forma expresa y específica en el instrumento las facultades para:

(a) realizar donaciones o transferencias a título gratuito con fondos o bienes del poderdante;

(b) transferir fondos, bienes o derechos del poderdante al propio apoderado para beneficio personal de este, excepto el reembolso de gastos razonables y debidamente documentados incurridos en el ejercicio del poder o la compensación expresamente autorizada conforme a derecho;

(c) añadir al apoderado o a otra persona como cotitular, copropietario o beneficiario de una cuenta, inversión o activo del poderdante cuando dicha designación confiera un derecho de propiedad, supervivencia o adquisición sobre los fondos o bienes;

(d) designar, sustituir o eliminar beneficiarios de pólizas de seguro, anualidades, cuentas de inversión, cuentas pagaderas al fallecimiento, planes de retiro u otros productos financieros, salvo que la legislación federal aplicable disponga otra cosa;

(e) crear, modificar o extinguir derechos de supervivencia sobre cuentas o activos financieros;

(f) utilizar, pignorar o gravar activos del poderdante para garantizar una obligación personal del apoderado o de un tercero; o

(g) condonar, renunciar o disponer gratuitamente de un crédito o derecho económico perteneciente al poderdante en beneficio del apoderado o de un tercero.

La autorización expresa de cualquiera de las facultades anteriores no relevará al apoderado de las obligaciones y prohibiciones establecidas en este Código, en el propio instrumento o en cualquier otra ley aplicable.”

Sección 3.- Se enmienda el inciso (f) del Artículo 15 de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley Notarial de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“Artículo 15. —

La escritura pública, en adición al negocio jurídico que motiva su otorgamiento y sus antecedentes y a los hechos presenciados y consignados por el notario en la parte expositiva y dispositiva, contendrá lo siguiente:

1 (a) ...

2 ...

3 (f) El habérseles hecho de palabra a los otorgantes en el acto del otorgamiento las
4 reservas y advertencias legales pertinentes. No obstante, se consignarán en el documento
5 aquellas advertencias que por su importancia deban, a juicio prudente del notario,
6 detallarse expresamente.

7 *Cuando el instrumento público contenga un poder que autorice a otra persona a*
8 *administrar o disponer de dinero, cuentas de depósito, valores, inversiones, seguros, anualidades,*
9 *fondos de retiro u otros activos financieros pertenecientes a una persona natural, el notario*
10 *advertirá expresamente al poderdante sobre:*

11 (1) *el alcance de las facultades que está confiriendo y el principio de interpretación*
12 *restrictiva aplicable a estas;*

13 (2) *aquellas facultades de especial trascendencia patrimonial que, conforme al Código Civil*
14 *de Puerto Rico, requieren autorización expresa y específica;*

15 (3) *el derecho del poderdante a establecer límites, condiciones o mecanismos de rendición*
16 *de cuentas en el instrumento;*

17 (4) *las obligaciones y prohibiciones que el ordenamiento impone al representante respecto*
18 *al manejo y utilización de los bienes administrados; y*

19 (5) *el derecho del poderdante a modificar o revocar el poder conforme a las disposiciones*
20 *legales aplicables.*

21 *El instrumento identificará claramente aquellas facultades de especial trascendencia*
22 *patrimonial enumeradas en el Artículo 330 del Código Civil de Puerto Rico que hayan sido*

1 *conferidas por el otorgante. La ausencia de autorización expresa se interpretará como que la*
2 *facultad correspondiente no fue concedida.*

3 *Nada de lo dispuesto en este inciso requerirá una certificación médica, evaluación de*
4 *capacidad o formalidad adicional basada exclusivamente en la edad del otorgante o en la existencia*
5 *de un impedimento. La capacidad continuará determinándose conforme a las disposiciones legales*
6 *aplicables y al juicio notarial requerido por esta Ley.*

7 (g) ...”

8 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 76-2020, según enmendada,
9 conocida como la “Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los
10 Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos”, para añadir un nuevo inciso (d), de
11 manera que lea como sigue:

12 “Artículo 5. —

13 Se ordena al Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación Pública
14 para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la Oficina del
15 Comisionado de Seguros a establecer los reglamentos, protocolos y los procesos de
16 prevención y detección de posibles casos de explotación financiera contra adultos
17 mayores o adultos con impedimentos, adoptados al amparo de sus respectivas leyes
18 orgánicas, los cuales incluirán los indicadores establecidos en el Artículo 3 de esta Ley.

19 Además, como parte del proceso de referidos a las agencias responsables de
20 atender los casos de explotación financiera, todas las instituciones cubiertas bajo esta Ley
21 deberán adoptar las siguientes disposiciones:

22 (a) ...

1 (b) ...

2 (c) ...

3 (d) *que cuando un poder, mandato, autorización u otro instrumento análogo sea presentado*
4 *para realizar una transacción financiera por cuenta de un adulto mayor o adulto con*
5 *impedimentos, la institución cuente con un procedimiento razonable para:*

6 (1) *verificar la identidad de la persona que comparece como representante y examinar la*
7 *suficiencia aparente del instrumento para la transacción solicitada;*

8 (2) *identificar y documentar las limitaciones, condiciones, términos o facultades expresas*
9 *del instrumento que resulten materiales a la transacción;*

10 (3) *verificar que la transacción solicitada se encuentre dentro del alcance de las facultades*
11 *conferidas, prestando particular atención a aquellas que el Código Civil de Puerto Rico exige que*
12 *consten de forma expresa y específica;*

13 (4) *documentar cualquier notificación recibida por la institución respecto a la revocación,*
14 *modificación, expiración o limitación judicial del instrumento;*

15 (5) *evaluar, conforme a los protocolos aplicables, las transacciones efectuadas al amparo del*
16 *instrumento cuando presenten uno o más indicadores de posible explotación financiera; y*

17 (6) *efectuar los referidos correspondientes cuando, luego de la evaluación aplicable, exista*
18 *una sospecha razonable de explotación financiera.*

19 *La mera existencia de un poder, mandato, autorización u otro instrumento análogo no*
20 *constituirá, por sí sola, un indicador de explotación financiera. Tampoco podrá presumirse*
21 *incapacidad, ausencia de consentimiento o explotación exclusivamente por razón de la edad,*
22 *impedimento o relación familiar entre el titular y la persona autorizada.*

1 *Nada de lo dispuesto en este inciso autorizará a una institución a imponer límites generales*
2 *a retiros, transferencias o transacciones exclusivamente por razón de la edad o impedimento del*
3 *titular, ni se interpretará como obligación de aceptar un instrumento falsificado, revocado,*
4 *expirado, materialmente alterado, insuficiente en derecho o utilizado para realizar una transacción*
5 *fuera de las facultades concedidas.*

6 Excepto cuando se demostrare mala fe o persecución maliciosa, no se podrá
7 imponer responsabilidad civil extracontractual a persona alguna que de buena fe provea
8 información al Comisionado de Instituciones Financieras, a la Corporación Pública para
9 la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, al Comisionado de Seguros o a
10 cualquier agencia del orden público sobre actos fraudulentos relacionados con la
11 explotación financiera de adultos mayores cometidos, en vías de ser cometidos, o por
12 cometerse. ...”

13 Sección 5.- Reglamentación.

14 La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Corporación Pública
15 para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y la Oficina del
16 Comisionado de Seguros deberán adoptar o atemperar, según corresponda, los
17 reglamentos, cartas circulares, protocolos o procedimientos necesarios para cumplir con
18 esta Ley dentro de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de su
19 aprobación.

20 La aplicación de las obligaciones sustantivas establecidas por esta Ley no estará
21 supeditada a la adopción o revisión de reglamentación.

22 Sección 6.- Armonización con legislación federal.

1 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará de forma que altere o sustituya
2 disposiciones de legislación federal que resulten aplicables a cuentas, productos
3 financieros, beneficios federales, planes de retiro sujetos a legislación federal o
4 instituciones sometidas a jurisdicción federal. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán
5 hasta el máximo permitido por el ordenamiento federal.

6 Sección 7.- Cláusula de Separabilidad.

7 Si cualquier disposición, palabra, oración, inciso, sección o parte de esta Ley fuere
8 impugnada por cualquier razón ante un tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal
9 determinación no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta
10 Ley, las cuales mantendrán su plena fuerza y vigor.

11 Sección 8.- Vigencia.

12 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.